



JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI.

(Oficina de Reparto).

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE: JESUS MARIA HINCAPIE

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

ANA MILENA RIVERA SANCHEZ, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional No. 130,188 del C.S de la J., actuando en mi calidad de apoderado del señor **JESUS MARIA HINCAPIE**, mayor de edad, con domicilio en Cali, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.515.495 de Cali, conforme al poder que me ha sido conferido y en ejerció del **medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, ante usted presento demanda en contra el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, representado legalmente por el señor **ALFONSO PRADA GIL** o quien haga sus veces, para que previo tramite del proceso contencioso administrativo se profieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución **No.1367 del 30/11/1990**, mediante la cual la Dirección Regional del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** le reconoció una pensión de jubilación a mi mandante en cuantía de \$ **171,114** a partir del **30/11/1990**; toda vez que no se le tuvieron en cuenta todos los factores salariales al momento de liquidar el ingreso base de liquidación (IBL) para la prestación económica de vejez.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acto Administrativo No. **2-2014-016474 del 28 de noviembre de 2014**, por medio del cual la Coordinadora Grupo Pensiones del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** dio respuesta negativa a la solicitud de 6 de noviembre de 2014.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de **RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO** en que ha sido lesionado mi mandante, solicito se pronuncie el despacho con las siguientes o similares condenas:

PRIMERO: CONDENAR al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** a **reliquidar** la Pensión de Jubilación de mi mandante, reconocida mediante Resolución **No. 1367/11/12/1990**, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por mi representado durante el último año de servicios con la correspondiente indexación de la primera mesada pensional.

SEGUNDO: CONDENAR al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** a pagar el retroactivo pensional que resulte a favor de mi mandante, a partir de la reliquidación de la pensión de jubilación, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre.

TERCERO: CONDENAR al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** de manera subsidiaria se le reconozca a mi poderdante la indexación de todas y cada una de sus mesadas pensionales, a la luz del artículo 187 del C.P.A.C.A.



CUARTO: CONDENAR al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** a pagar los intereses señalados en el artículo 192 del C.P.A.C.A., a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria del fallo que ponga fin al presente litigio.

QUINTO: CONDENAR al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** a pagar las Costas y Agencias en Derecho que se causen en este proceso, en virtud del artículo 188 del C.P.A.C.A.

HECHOS

PRIMERO: Mediante la Resolución **No. 1367 DE 1990**, la Dirección Regional del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** reconoció la pensión de jubilación a mi mandante, el señor **JESUS MARIA HINCAPIE**, en cuantía de \$ **171,114.00 a partir del 30/11/1990**.

SEGUNDO: Mi mandante nació el día **4/05/1994** y prestó sus servicios al SENA durante 20 años, 2 meses y 8 días, por lo tanto es beneficiario del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

TERCERO: Mediante la Resolución **No. 1367 DE 1990**, el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** aceptó la renuncia de mi poderdante.

CUARTO: Para conceder la pensión de jubilación, el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** debió aplicar el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que consagra, como requisitos para acceder a la pensión, haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y veinte (20) años de servicio, y además establece la forma para calcular el ingreso base de liquidación (IBL), el cual corresponde al 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de servicio y del resultado anterior, haber indexado la primera mesada pensional, lo cual la demandada no lo hizo.

QUINTO: Para determinar la cuantía de la pensión de jubilación de mi poderdante, no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales devengados durante su último año de servicio y del resultado de eso no indexo la primera mesada pensional.

SEXTO: El **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** debió tener en cuenta los siguientes factores salariales para liquidar la pensión de mi mandante: ***asignación básica, retroactivo, sueldo por vacaciones, subsidio de alimentación, horas extras, recargo nocturno, prima de vacaciones, prima de servicio, prima de navidad, prima de quinquenal, bonificación.***

SEPTIMO: Mediante petición del **12 de noviembre de 2014**, mi poderdante le solicitó al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, la **RELIQUIDACIÓN y REAJUSTE** de la pensión de jubilación.

OCTAVO: Mediante comunicación **No. 2-2014-015972 del 6 de noviembre de 2014**, la entidad demandada negó la solicitud de reajuste y reliquidación de la pensión de jubilación de mi poderdante.

NOVENO: Con la emisión de respuesta a la petición elevada y estando dentro del término legal establecido, se encuentra agotado el trámite administrativo exigido previo a instaurar la presente demanda.



NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE TRASGRESIÓN

El **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** mediante la expedición de la Resolución No. 1367 de 1990 y el Acto Administrativo No. 2-2014-016474 del 08/11/2014, vulneró tratados internacionales ratificados por Colombia, así mismo los preceptos constitucionales y legales que a continuación se detallan.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES POR FALTA DE APLICACIÓN

De los actos administrativos emitidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA frente a mi poderdante, encontramos vulnerados los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 58, 93 y 209 de nuestra Constitución Política, en razón a las siguientes consideraciones motivo de la transgresión.

➤ Estado Social de Derecho.

El artículo 1° de nuestra Constitución Nacional señala: *“ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.*

A su vez, el segundo artículo constitucional reza: *“ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Del tema, la Corte en sentencia C-397 de 1995¹ manifestó: *“Los pensionados, que al fin y al cabo gozan de especial protección en cuanto su situación jurídica tiene por base el trabajo, son titulares de un derecho de rango constitucional a recibir puntualmente las mesadas que les corresponden y a que el valor de éstas se actualice periódicamente según el ritmo del aumento en el costo de la vida, teniendo en cuenta que todo pago efectuado en Colombia, al menos en las circunstancias actuales, debe adaptarse a las exigencias propias de una economía inflacionaria. Ello es consustancial al Estado Social de Derecho, que se ha instituido como característica sobresaliente de la organización política y como objetivo prioritario del orden jurídico fundado en la Constitución, por lo cual no cabe duda de la responsabilidad en que incurren los funcionarios y entidades que desatienden tan perentorios mandatos”.* (Resalto).

En otro pronunciamiento efectivo sobre el tema de la indexación, la Corte Constitucional en sentencia C-862 de 2006² indicó: *“Por otra parte, caber recordar brevemente que el surgimiento y consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al reconocimiento y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera tal que la actualización periódica de las mesadas pensionales sería una aplicación concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales en virtud del modelo expresamente adoptado por el artículo primero constitucional”.* (Resalto).

¹Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-397 del 16 de agosto de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

²Corte Constitucional, sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.



Como se puede deducir de los pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, entre los fines esenciales del Estado Social de Derecho esta la protección eficaz e idónea de los derechos económicos de todos los colombianos y en especial de las personas de la tercera edad como son los pensionados, cuya población goza de especial protección constitucional.

De los anteriores artículos constitucionales se infiere que las manifestaciones emitidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en los actos administrativos demandados, vulneraron los preceptos constitucionales transcritos, al no tener en cuenta un criterio objetivo para reconocer y liquidar la pensión de jubilación de mi mandante, por cuanto no garantizó la actualización del salario base de liquidación para la primera mesada pensional, desconociendo la amplia jurisprudencia al respecto.

➤ Del derecho a la igualdad.

Por su parte, el artículo 13 ibídem señala: *“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

En nuestro sentir, la reafirmación del principio y derecho constitucional de igualdad ante la Ley, tiene por objeto materializar en forma progresiva las condiciones sociales, económicas y culturales que reduzcan al máximo los desequilibrios existentes en las oportunidades del desarrollo humano para los ciudadanos.

Como lo afirma la Honorable Corte Constitucional, los pensionados conforman un universo en donde no existe diferencia entre ellos, sin importar el régimen mediante el cual obtuvieron tal condición, toda vez que la constitución les consagra una protección por igual.

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C-862 de 2006³ indicó que el reconocimiento de la indexación a determinadas categorías de pensionados genera un trato discriminatorio:

“el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio.

En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos –los pensionados– dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación. (...)” (Resalto).

No se explica el proceder del SENA de darles a los jubilados a su cargo un tratamiento desigual al que se le da a los demás pensionados, lo que constituye una clara violación al derecho a la igualdad, por cuanto la

³Corte Constitucional, sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.



entidad al no indexar el salario base de liquidación para la primera mesada pensional, se verían afectados todos los pensionados por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, y por tanto, todos merecen la misma protección. Por lo tanto, dicho principio constitucional ampara la situación pensional de mi mandante.

➤ **Del derecho al trabajo.**

A su vez, el artículo 25 constitucional reza: *"ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas"*.

Al respecto, el accionante prestó toda su fuerza laboral al servicio del Estado, como se dijo por más de 24 años⁴, por lo cual debe gozar de la expectativa que deriva de las normas pertenecientes al Régimen de Transición pensional de los empleados del Estado, por lo que las actuaciones desplegada por la entidad demandada al momento de calcular la mesada pensional fueron en contra de los derechos adquiridos por mi mandante, ya que si bien efectuó lo contemplado en el artículo 1° de la Ley 33° de 1985, la entidad **no** actualizó el salario base de liquidación para la primera mesada pensional, generando un desequilibrio laboral que se pretende aquí subsanar.

➤ **La mesada pensional como mínimo vital y la protección especial para el adulto mayor.**

Sobre el primer tema, la Corte en la sentencia ya citada⁵, indicó:

"la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto sujetos de especial protección constitucional. (...)" (Resalto).

Más adelante, la Alta Corporación sostuvo:

"Así, en algunas ocasiones se ha afirmado que precisamente la no indexación del salario base es un supuesto que le confiere carácter fundamental al derecho a la actualización de las mesadas pensionales, sobre esta línea argumentativa es ilustradora la sentencia T-906 de 2005 antes citada:

No obstante lo anterior, la Corte no desconoce que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones puede llegar a considerarse excepcionalmente como un derecho fundamental por conexidad.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se rompe de manera abrupta la proporción entre el valor histórico de la pensión y su valor actual y esta circunstancia tiene como consecuencia la afectación del derecho al mínimo vital, a partir de una valoración de mínimo patrimonial. Es decir cuando la mesada pensional ha sufrido una depreciación tan insoportable que negar el derecho a mantener el poder adquisitivo de la pensión, amenaza las condiciones de subsistencia del titular del derecho prestacional.

Esto también puede ocurrir cuando de las circunstancias concretas sea posible concluir, que se ha presentado un trato discriminatorio por parte de las entidades encargadas del pago de las mesadas pensionales. Así sucede cuando por ejemplo, sin ningún criterio relevante, estas entidades deciden indexar las mesadas de

⁴Según se desprende de la Resolución No. 0389 del 11 de Abril de 1990 y la Certificación No. 313 del 11 de agosto de 2014 emitidos por el SENA.

⁵Sentencia C-862 de 2006.



algunos de sus pensionados y no así las de otros, estando todos ellos en el mismo supuesto de hecho fáctico y jurídico (negrillas agregadas)".

Por otra parte, el artículo 46 de nuestra carta señala: *"El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria."*

Mi poderdante es un adulto mayor, quien depende exclusivamente de su mesada pensional para suplir sus necesidades básicas, por lo que no cuenta con otros medios de subsistencia. El reconocimiento indebido por parte del SENA de su primera mesada pensional afecta su calidad de vida digna, al ser disminuido su único sustento económico, afectando su mínimo vital, recalcando que nos encontramos frente a un sujeto de especial protección constitucional.

La Corte, en la sentencia ya citada⁶ sobre el tema indicó: *"Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto sujetos de especial protección constitucional"*. (Resalto).

En otro pronunciamiento, la Corte en la sentencia T-351 del 11 de mayo de 2010, con Ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, con respecto a los adultos mayores se indicó:

"...Aunado a lo anterior, debe ponerse de presente que en el peticionario confluyen dos circunstancias que lo inscriben dentro de la categoría de sujetos de especial protección constitucional, por cuanto, en primer término, nació el 27 de agosto de 1949, es decir, está próximo a cumplir los 61 años de edad, con lo cual se trata de un sujeto de especial protección constitucional ya que es un adulto mayor, en los términos del artículo 7 de la Ley 1276 de 2009:

"Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. Como se ha señalado, el peticionario es un adulto mayor, situación que, como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, lo coloca en una situación de indefensión manifiesta, agravada por los severos quebrantos de salud que suelen acompañar el proceso natural de envejecimiento del ser humano...". (Resalto).

Como se detalla, la H. Corte Constitucional insiste en el especial cuidado que se debe brindar a los adultos mayores, etapa de vida en la que se encuentra el demandante⁷, lo que de forma obligatoria conlleva a que se protejan todos sus derechos transgredidos.

➤ **Del principio de la condición más beneficiosa.**

Por otra parte, el artículo 48 constitucional, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 001 de 2005 consagra:

"El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

⁶ Corte Constitucional, sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁷ Nació el 13 de abril de 1929, por lo que en la actualidad tiene 86 años de edad.



La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas". (...) "En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

"Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido".

"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión....". (Resalto).

Se insiste en que el actor, al cumplir con los requisitos contemplados en la normatividad, alcanzó el *status* de pensionado, lo que representa la obligatoriedad de la entidad pública a respetar dicho derecho adquirido, por lo que cualquier manifestación y/o actuación en contra de dicho precepto constituye una violación al mandato constitucional y una afectación al derecho pensional. No actualizar el salario base de liquidación para la primera mesada pensional de mi mandante afecto dicho precepto adquirido.

➤ Del poder adquisitivo de la mesada pensional como derecho de rango constitucional.

Al respecto, el artículo 53 consagra: *"El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:*

*Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; **situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho**; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; **garantía a la seguridad social**, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad (...)*

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales." (Resalto).

Los actos administrativos emitidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en contra de mi poderdante resultan violatorias del anterior principio constitucional, ya que desconocen el mandato constitucional del *poder adquisitivo de las pensiones*, en tanto no indexó el salario base de liquidación de la primera mesada pensional, desfavoreciendo los parámetros pensionales aplicables al actor.

Así mismo, la entidad demandada transgredió el *principio de la condición más beneficiosa*, según el cual ni siquiera la ley puede menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores, toda vez que el señor José Gerardo Andela Cotazo adquirió el amparo del Régimen de Transición por su edad y el tiempo de servicio prestado, sin embargo éste no le fue suficiente para aplicarle el mandato constitucional de la indexación de la primera mesada pensional.

En cuanto al tema, la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995 señaló:

"En el inciso final, que es el precepto del cual deduce el actor la existencia de la denominada "condición más beneficiosa" para el trabajador, concretamente de la parte que se resaltará, prescribe: "la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".



(...)

De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, **es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador.**

El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de favorabilidad, así: **"En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad"**; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere del **"in dubio pro operario"**, según el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas interpretaciones, se ordena prohiar la que resulte más favorable al trabajador". (Resalto).

Más adelante, en el mismo pronunciamiento, la Corte recalcó la importancia del poder adquisitivo de las pensiones como derecho de rango constitucional, no solo para las mesadas reconocidas, sino que también para la actualización del salario base de liquidación para la primera mesada pensional:

"La jurisprudencia constitucional se ha referido de manera reiterada tanto en sede de tutela como de constitucionalidad sobre el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y ha sostenido de manera reiterada que es un derecho de rango constitucional, que encuentra fundamento en los distintos preceptos constitucional a los cuales antes se hizo alusión, sobre este extremo resulta ilustradora la sentencia T-906 de 2005:

También se ha dicho que la naturaleza del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones parte de la base de que el mismo es considerado como un derecho de rango constitucional. Esto en razón a que existen tres disposiciones constitucionales que lo sustentan: la primera contenida en el artículo 48, a saber: "la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante", las dos restantes contenidas en el artículo 53, la primera: "la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales... ...la remuneración mínima vital y móvil..." y la segunda, que establece que "el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales"

Así mismo, no olvida la Corte que en la definición de la naturaleza y particularidades del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, otras disposiciones constitucionales juegan también un papel definitivo. Es el caso de las contenidas en el preámbulo de la Carta, al mencionarse como propósito de la Constitución la de garantizar "un orden político, económico y social justo", o la del artículo 1, que señala que la República esta fundada en "la solidaridad de las personas que la integran" o las del artículo 13 que incorpora la obligación para el Estado de promover "las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva" o incluso los propios principios con sujeción a los cuales se prestará el servicio público de seguridad social, definidos en el artículo 48: "eficiencia, universalidad y solidaridad".

Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a juicio de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también **incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada.** Al



respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de tutela⁸ proferidas por esta Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas pensionales (...). (Resalto).

Sobre la indexación de la primera mesada pensional, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-1073⁹ de 2012, reiteró que la indexación es un derecho adquirido de rango constitucional, con armonía del poder adquisitivo de la mesada pensional:

*"El derecho a la indexación de la primera mesada pensional materializa diversos preceptos de rango constitucional, y por tanto, a partir de la Constitución de 1991 existe **"un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional"**. Éste, se deduce no solamente de lo consagrado expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, sino que se deriva de una interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales (...)"* (Resalto).

➤ **De los derechos adquiridos.**

El artículo 58 constitucional consagra los derechos adquiridos de conformidad con las leyes civiles vigentes, las cuales **no pueden ser desconocidas ni vulneradas por normas posteriores**, por lo que deben ser respetados, lo que no ocurre en el presente caso, ya que las actuaciones del SENA han trasgredido dicho precepto constitucional, por cuanto no respecto el derecho adquirido de mi mandante a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, toda vez que la entidad no actualizo el salario base de liquidación para la primera mesada pensional.

➤ **De los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia.**

El artículo 93 de la norma superior reza: *"Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno."*

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (...)."

Al respecto, las actuaciones adelantadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA como entidad estatal, deben siempre respetar todos los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, más aun tratándose de parámetros pensionales y el respeto de los derechos de esta estirpe, lo que efectivamente no ocurre en el presente caso, por cuanto del acervo probatorio que se aporta se logra finiquitar que la entidad demandada no indexó el salario base de liquidación para la primera mesada pensional de mi mandante, desconociendo el poder adquisitivo de la mesada pensional como derecho constitucional adquirido.

De lo anterior se concluye que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA desconoció todos estos principios constitucionales transcritos, al negar el reconocimiento del derecho que tiene mi poderdante a la **reliquidación y el reajuste** de su pensión de jubilación, por no indexar el salario base de liquidación para la primera mesada pensional, desconociendo el poder adquisitivo de la prestación como derecho constitucional adquirido, el cual debe ser respetado, reconocido y pagado por la entidad aquí demandada, a

⁸ Ver entre otras las sentencias SU-120 de 2003, T-1169 de 2003, T-663 de 2003, T-805 de 2004, T-815 de 2004, T-098 de 2005.

⁹ Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación 1073 del 12 de diciembre de 2012, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, medio de control Acción de Tutela, instaurada por Pablo Enrique Murcia Gómez, Gladys Hau Cheng y Jorge Eliécer Quecán Moreno contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y otros.



la luz de lo contemplado en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional.

Ahora, si bien es cierto, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se basó en la Ley 33° de 1985 y el Decreto Ley 1045 de 1978 para conceder la pensión vitalicia de jubilación a mi mandante, pero no indexó el salario base de liquidación para la primera mesada pensional, como se desprende del acervo probatorio allegado, lo cual genera una diferencia entre la mesada pensional que debió reconocer el SENA y la que actualmente ha venido cancelando la entidad.

CONCEPTO DE VULNERACION DE NORMAS LEGALES POR FALTA DE APLICACIÓN

En razón de los actos administrativos emitidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA frente a mi poderdante, encontramos vulnerados los artículos 1, 17, 21, 23, 24 y 26 de la Ley 16° de 1972; artículos 14 y 21 de la Ley 100 de 1993; y los artículos 4, 9, 19, 15 de la Ley 319 de 1996, los cuales se argumentan así:

➤ De la Ley 16° de 1972 y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En cuanto a los artículos vulnerados de la Ley 16° de 1972, la misma ratificó en su totalidad e incorporó incondicionalmente en el derecho interno Colombiano la Convención Americana de Derechos Humanos. La misma hace mención, entre otras, a la obligación del Estado Colombiano de respetar y proteger los derechos de sus administrados, tales como: a la protección familiar, a los derechos políticos, **a la igualdad ante la ley y al desarrollo progresivo**, entre otros, por lo que las actuaciones desplegadas por la entidad demandada irrespetan los derechos adquiridos del actor, por cuanto no actualizó el salario base de liquidación para el goce de la primera mesada pensional, generando un desequilibrio que se pretende subsanar.

➤ De la Ley 100 de 1993 y el poder adquisitivo constante.

Al respecto, el artículo 14 señala:

"ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones: Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, **mantengan su poder adquisitivo constante**, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno. (...)" (Resalto).

Por su parte el artículo 21 señala:

"ARTICULO 21. -Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, **actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor**, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo". (Resalto).

AJUCOM Cali

Calle 14 No56-152 oficina 205. Tel:3395637 - 312-3010270

Email: ajucomCALI@gmail.com



Como se desprende de los artículos transcritos, la ley contempló que las pensiones, sin importar su índole, deben mantener de oficio su poder adquisitivo constante actualizándose anualmente con base a la variación del índice de precios al consumidor IPC. Dicho poder no es limitado para aquellas personas que gozan de su mesada pensional, sino que también para aquellas personas que se les liquide su primera mesada, actualizando su salario base de liquidación y calcular el monto a percibir periódicamente.

Dicho esto se tiene entonces que para el caso *sub juice* la entidad demandada no indexó el ingreso base de liquidación para la primera mesada pensionales de mi mandante, por lo cual se exige que se corrija dicha anomalía generadora de vulneraciones que se pretenden subsanar.

➤ **De la Ley 319° de 1996 y el protocolo de San Salvador sobre Derechos económicos, sociales y culturales.**

En lo relativo a la Ley 319 de 1996, la misma ratificó el protocolo de San Salvador sobre Derechos Humanos, *en materia de derechos económicos, sociales y culturales*, la cual hace parte del Bloque de Constitucionalidad y prevalecen sobre el orden interno, incorporando parámetros para evitar las restricciones y/o vulneraciones frente al **derecho a la seguridad social** de los administrados, el derecho a la **protección de los ancianos** y minusválidos, **el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de Trabajo**, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, **el derecho a la aplicabilidad constitucional** y la protección de la familia, entre otros.

Dicho protocolo advierte a sus Estados miembros, entre ellos Colombia, sobre el:

“Alcance de las Restricciones y Limitaciones:

Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos”.

Cabe enfatizar que es el Estado Colombiano es el primer llamado a respetar y vigilar la eficaz aplicabilidad del protocolo frente a sus administrados, en concordancia con los parámetros establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y el citado protocolo de San Salvador.

Por lo tanto, las actuaciones u omisiones por parte del Estado que amenacen, vulneren, o desconozcan los derechos contenidos en el protocolo de San Salvador, deberán ser protegidos por los jueces contenciosos administrativos de la República, quienes vigilan y/o corrigen el actuar de la administración pública frente a sus súbditos, entre ellos la población pensionada.

DEL CONCEPTO, APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LA INDEXACION DEL SALARIO BASE DE LIQUIDACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL DEL DEMANDANTE

Del vacío normativo en cuanto a la indexación de la primera mesada pensional y el deber del Juez de subsanarlo.

Como primera medida, me permitiré recalcar y trae a colación la evolución jurisprudencial que sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte



Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en cuanto a la indexación del salario base para la liquidación de la primera mesada pensional.

La Corte Constitucional al efectuar el estudio de Constitucionalidad del numeral 1° y 2° del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo¹⁰ sostuvo:

"Si bien en decisiones previas¹¹ esta Corporación se ha referido de manera detallada a la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de la indexación del salario base para la liquidación de la pensión de jubilación, debido a la naturaleza de la cuestión objeto de examen en la presente decisión es preciso introducir brevemente el tema.

(...)

Al examinar el numeral 2 del artículo 260 del C. S. T. en lo relacionado a la indexación de la primera mesada pensional, la Corte destacó que: i) no existe norma que regule expresamente cuál debe ser la base de liquidación pensional para las personas que han sido retiradas o se han retirado voluntariamente del servicio sin haber llegado a la edad requerida; ii) no hay norma alguna que ordene concretamente la indexación de este tipo de pensiones; iii) ningún precepto prohíbe específicamente la actualización de la primera mesada pensional a esta suerte de extrabajadores.

No obstante, anotó esta Corporación, el artículo 53 superior consagra expresamente el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y, además, diversas disposiciones normativas denotan la preocupación del legislador por evitar la pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Es deber del Juez, de conformidad con esta providencia, comportarse ante el vacío normativo en materia laboral como lo habría hecho el legislador de haber regulado la hipótesis no normada expresamente. Debe subsanar el juez la omisión legislativa, continúa la Sala, acudiendo a los postulados laborales constitucionales y legales, los cuales indican que lo más equitativo es reconocer el derecho a la indexación del promedio de salarios percibidos durante el último año de servicios y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre los cuales el afiliado cotizó durante los diez años anteriores al cumplimiento del lleno de los requisitos.

Concluyó esta Corporación que, en atención a las fuentes auxiliares de derecho contempladas en el artículo 230 constitucional, la definición de la actualización en estas hipótesis no puede ser arbitraria. Indicó que, criterios como la equidad llevan al operador jurídico a descartar las desigualdades que se derivan de los vacíos normativos, al igual que la prescripción del artículo 53 superior, según la cual debe preferirse aquella que beneficie en mayor medida al trabajador (principio de favorabilidad). De igual manera, recordó esta Corporación que el principio pro operario es fuente de derecho y, por tanto, debe ser aplicada por el operador judicial al momento de dirimir litigios laborales no expresamente regulados por el ordenamiento, en tanto debe propender por la defensa de la parte más débil de la relación laboral. Con fundamento entonces en estas reglas de interpretación, consideró la Sala que se cumple de manera más óptima el fin central de las normas protectoras laborales, el equilibrio de las relaciones de trabajo, inclinando la balanza a favor del extremo más débil: el trabajador¹². Esta tesis fue reiterada posteriormente en numerosas decisiones de tutela proferida por esta Corporación¹³. (Resalto).

Más adelante la Corte concluyó:

"(...) si bien puede afirmarse que existe un derecho constitucional a la actualización de las mesadas pensionales, del cual hace parte el derecho a la actualización del salario base para la liquidación de la pensión o de la primera mesada pensional, en esta materia como antes se dijo existe una amplia libertad de configuración del Congreso de la República, precisamente debido a que el artículo 48 constitucional señala que incumbe al órgano legislativo establecer los medios para el cumplimiento de tal fin. Desde esta perspectiva, corresponde al Legislador señalar los mecanismos idóneos para garantizar este derecho constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva jurisprudencial el problema siempre ha sido considerado a partir del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, es decir, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Corte

¹⁰ Sentencia C-862 de 2006.

¹¹ Ver la sentencia SU-120 de 2003.

¹² Cfr. sentencia T-815 de 2004.

¹³ Cabe mencionar las sentencias T-663 de 2003, T-805 y T-815 de 2004 y T-098 de 2005.



Constitucional, se han referido a un instrumento específico para actualizar el salario base de la liquidación de la mesada pensional: la indexación. (Resalto).

El derecho constitucional del poder adquisitivo de la mesada pensional y la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada.

Al respecto el Tribunal Constitucional en varios pronunciamientos se ha referido al tema, es así como en la sentencia T-628 de 2009¹⁴ indicó que el poder adquisitivo no solo de limita a la actualización de las mesadas pensionales, sino que también la indexación del ingreso base de liquidación para la primera mesada:

*“Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones porque éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que **también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada.** Al respecto cabe destacar que las numerosas decisiones de tutela¹⁵ proferidas por esta Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas pensionales.*

*La jurisprudencia constitucional ha derivado así, de distintos preceptos constitucionales, **un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional** dentro de cuyo ámbito de conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Justo en esa línea de pensamiento, **ha recalcado la Corte Constitucional que la indexación “es el criterio empleado de manera preferente por el Congreso de la República para mantener la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales”.** Desde luego, la Corporación ha reconocido, como se indicó con antelación, un amplio margen de apreciación a favor del Legislador pero también ha insistido en que un vacío de regulación respecto de este tópico no debe proyectarse de manera negativa en la garantía de los derechos constitucionales fundamentales ni resultar contraria a principios previstos en la Constitución de 1991 “-tales como el principio de in dubio pro operario, y el principio de Estado social de derecho-” por lo que **“es preciso adoptar un criterio reparador de la afectación constatada”**¹⁶. En esa misma dirección, ha entendido la jurisprudencia constitucional que dicha medida es precisamente “la indexación” que al haber sido tomada por la legislación vigente para aplicarla al resto de pensionados, se convierte en **“un mecanismo adecuado para la satisfacción de los derechos y principios constitucionales en juego”**¹⁷.” (Resalto).*

Como conclusión de la anterior sentencia, la Corte destacó dos puntos cruciales que se aplican a la situación de mi mandante y así mismo generalizó la procedencia del derecho a la indexación de la primera mesada para todos los pensionados, sin que exista discriminación alguna entre ellos:

*“Puede concluirse que esta Corporación ha considerado (i) **que la indexación en tanto que un mecanismo idóneo –aunque no el único- para garantizar la actualización de la primera mesada pensional,** o mejor, del salario base para liquidación de esta prestación económica cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que la persona trabajadora se retira o es retirada de una empresa y el instante de reconocimiento de su pensión; (ii) **se trata de una pretensión con sustento en el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión** y ha sido protegido tanto en sede de constitucionalidad como en sede de tutela en numerosas oportunidades.*

Adicionalmente, ha dispuesto la Corte, respecto de las personas titulares del derecho a la actualización de la mesada pensional y a la indexación de la primera mesada pensional, que tal derecho no sólo “radica en [algunas personas

¹⁴ Corte Constitucional, sentencia T-628 del 4 de septiembre de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

¹⁵ Entre otras, las sentencias SU-120 de 2003, T-1169 de 2003, T-663 de 2003, T-805 de 2004, T-815 de 2004, T-098 de 2005.

¹⁶ Corte Constitucional. Sentencia C-862 de 2006.

¹⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-862 de 2006.



pensionadas], sino que, por el contrario, **se extiende a la totalidad de [ellas]**. Lo anterior quiere decir, que **no cabe hacer ningún tipo de discriminación respecto de quienes tienen derecho a la indexación de la primera mesada pensional puesto que ello traería como consecuencia limitar los alcances de este derecho¹⁸**.” Con sustento en el precedente sentado por la Corte en sentencia C-862 de 2006, las Salas de Revisión de tutela¹⁹ han puesto énfasis en que:

“[el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, **porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio**. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien **el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos –los pensionados– dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal**, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.”. (Resalto).

Como se desprende del pronunciamiento transcrito, todos los pensionados sin discriminación alguna deben ser beneficiarios del poder adquisitivo de sus mesadas pensionales, y por ende gozar del derecho a que se indexe las mismas, lo que no ocurrió en el momento del reconocimiento de la prestación económica para mi mandante, por cuanto como se desprende de las pruebas aportadas, el SENA no indexó su salario base de liquidación de la primera mesada pensional, transgrediendo sus derechos constitucionales adquiridos, tornándose discriminatorio e injustificado dicha actuación que aquí se pretende corregir. Así lo recalcó la Corte Constitucional en la sentencia estudiada:

“Se destaca finalmente que en la sentencia T- 098 de 2005, con ocasión de una tutela dirigida contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por no haber reconocido el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, resolvió conceder la protección constitucional invocada con el argumento de que no era dable calcular el monto de la primera mesada pensional con base en un ingreso que el accionante percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión, ya que de ser ello así, **se vulneraría el mandato superior de la equidad, el derecho a percibir una pensión mínima calculada teniendo en cuenta los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del dinero, así como también comprometería los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad**”. (Resalto).

Por lo todo lo expuesto, la Corte finiquitó el tema afirmando que todos los pensionados tiene derecho a mantener el poder adquisitivo de sus mesadas pensiones y así mismo a la indexación del salario base de liquidación para la primera mesada:

“según los dictados de la jurisprudencia vigente, **todas las personas pensionadas tienen el derecho a mantener el poder adquisitivo de sus mesadas pensionales, sin distingos de ninguna índole**, así como a obtener de la entidad liquidadora de su pensión, la reliquidación de su primera mesada pensional.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la calidad de pensionado de mi mandante, éste tiene derecho a mantener el poder adquisitivo de sus mesadas pensiones y así mismo a la indexación del salario base de liquidación para la primera mesada, como lo aquí pretendido, ya que el SENA al momento del cálculo de la mesada pensional no actualizó dicho salario base de

¹⁸ Corte Constitucional. Sentencia T-696 de 2007.

¹⁹ Corte Constitucional. Sentencias T-696 de 2007; T-313 de 2008; T-014 de 2008, entre otras.



liquidación, generando diferencias en la mesada reconocida y la que efectivamente debió recibir.

Evolución jurisprudencial del derecho a la indexación de la primera mesada pensional en relación con las pensiones causadas antes de la carta magna de 1991.

La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-1073 de 2012²⁰, consolidó las distintas reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la actualización de la primera mesada pensional como derecho adquirido de carácter universal, y así mismo para aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, como ocurre en el presente caso:

“No existe ninguna razón constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la actualización de la mesada pensional sea predicable exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, cuando todos se encuentran en la misma situación y todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación monetaria.

Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha señalado expresamente que ***éste es un derecho de carácter universal que debe ser garantizado a todos los pensionados. De lo contrario, se produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad que constituye un trato discriminatorio***.
(...)

De esta manera, ***la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada es predicable de todas las personas pensionadas, y por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedición de la Constitución Política. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situación y por tanto, deben recibir igual tratamiento.***

No existe razón alguna para predicar un trato diferenciado a las personas que consolidaron su situación pensional bajo la Carta anterior. Por el contrario, ellas también sufren una grave afectación a su mínimo vital al recibir una suma significativamente inferior a la que tienen derecho y a la que efectivamente recibieron durante su etapa productiva.

En otras palabras, esta Sala considera que a todos los pensionados, ***sin distinción alguna***, no sólo debe garantizárseles que sus pensiones sean actualizadas anualmente una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también existe un ***derecho constitucional*** a la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada”. (Resalto).

Más adelante la Corte resaltó que a partir de la expedición de la sentencia de unificación se exigió la indexación de la primera mesada pensional y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento:

“Al respecto, se debe recordar que, sólo hasta que fue expedida la sentencia C-862 de 2006, la Corte definió con carácter erga omnes que a partir de la interpretación de los artículos 48 y 53 de la Constitución de 1991 debía entenderse que existe un derecho constitucional de todos los pensionados a que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre un salario base indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. Por lo tanto, sólo a partir de tal fallo llegó a admitirse que dicho derecho beneficiaba a todos los pensionados, sin que sobre el particular pudieran hacerse distinciones discriminatorias entre beneficiarios de pensiones legales, convencionales, ordinarias, pensiones sanción, etc. Estas consideraciones, como se reitera, se basaron en la interpretación de la Carta Política de 1991. No obstante, ni siquiera en 2006 existía una posición uniforme en relación con las pensiones causadas bajo el marco constitucional de 1886.

De manera que, es a través de esta sentencia de unificación que la Corte Constitucional consolida la jurisprudencia con el fin de proteger el principio de seguridad jurídica respecto de los fallos judiciales divergentes que han proferido

²⁰ Corte Constitucional, sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.



distintas jurisdicciones, los cuales han impedido la realización del derecho universal de la indexación. En este sentido, es sólo hasta esta sentencia de unificación que la Corte ha resuelto las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991.

De ahí que, **sólo hasta este momento** exista claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, de manera que **desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento.**

(...)

En este orden de ideas, pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que **sólo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible**". (Resalto).

De las conclusiones jurisprudenciales sobre la indexación de la primera mesada pensional.

En la sentencia de unificación SU-1073 del 12 diciembre de 2012, la Corte Constitucional indicó que el derecho a la actualización de la primera mesada pensional cubre a todas las pensiones, sin distinción de origen o por el momento de su causación, concluyendo que:

- **"El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores".** (Resalto).
- **"La garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, con anterioridad de la expedición de la Carta, sino que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los artículos 48 y 53".** (Resalto).
- **"Además, también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral contenido en el artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no es otra que su reconocimiento universal, inclusive de las personas que adquirieron su derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto el fenómeno inflacionario afecta a todos por igual".** (Resalto).
- **"El reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional también es un desarrollo del principio del Estado Social de Derecho y una garantía que desarrolla los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección constitucional a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo vital".** (Resalto).

Como se desprende del pronunciamiento unificado de la alta corporación, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional opera para todos los pensionados sin importar su calidad o la fecha en que se causa, por cuanto es un derecho adquirido de rango constitucional con fundamento en para metros constitucionales como el poder adquisitivo de las pensiones, el derecho a la seguridad social, igualdad, mínimo vital y protección a la población de la tercera edad como sujetos de especial protección, junto con el principio de la favorabilidad en materia pensional, del principio del Estado Social de Derecho y el de seguridad jurídica.

Por lo tanto, es factible afirmar que las anteriores premisas respaldan las pretensiones de la alzada, por cuanto se ajustan al caso bajo estudio, por cuanto se tiene que el SENA al no indexar el salario base de liquidación de la primera mesada pensional de mi mandante, generó diferencias que se deben reconocer y pagar.



Del reconocimiento y pago de las diferencias causadas retroactivamente por la no indexación del salario base de liquidación.

En cuanto al tema, la Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2013²¹ enfatizó que es exigible el pago retroactivo de los valores dejados de percibir por la no actualización de la primera mesa pensional a partir de la sentencia de unificación SU-1073 de 2012, la cual trae un criterio claro:

“En lo atinente al reconocimiento y pago del retroactivo, la sentencia de unificación dispuso que ante la inexistencia de un criterio claro y unificado en torno al tema de la actualización de la base salarial, no es admisible exigir al demandado el pago del retroactivo desde el momento de la consolidación del derecho. Razón por la cual, a partir de la unificación se contabilizará el término de exigibilidad del mismo, así:

“En primer lugar, resalta la Sala la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica en este caso, pues la indeterminación en la existencia del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, y la negativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente al reconocimiento de la indexación de pensiones causadas con anterioridad a 1991, podría acarrear problemas en la determinación del momento a partir del cual la prestación es exigible. En efecto, sería desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue incierto.

(...)

De ahí que, sólo hasta este momento exista claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, de manera que desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento.

(...)

En este orden de ideas, pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible.”

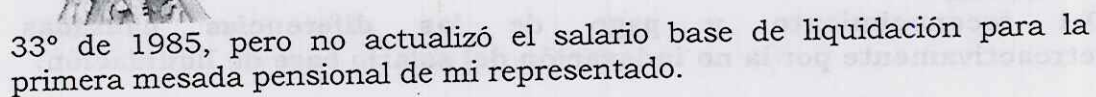
Dicho concepto de unificación de la Corte Constitucional adopta una evolución jurisprudencial acertada, garantista de derechos fundamentales y de preceptos constitucionales inherentes al tema de seguridad social, que en concordancia con el principio de la protección al erario público, garantizan los derechos del trabajador sin menoscabarlo. Por tanto el derecho a la indexación del salario base de liquidación para la primera mesada pensional de mi mandante es un derecho adquirido de rango constitucional, universal para todos los pensionados, en armonía del poder adquisitivo de las pensiones y los mandatos constitucionales contemplados en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, por lo que las actuaciones desplegadas por el SENA afectan dichos parámetros constitucionales, las cuales se pretenden subsanar.

Dichas actuaciones injustificadas de la entidad, generaron diferencias entre la mesada concedida y la que efectivamente debió reconocerle, como se desprende de las tablas ilustrativas que más adelante expondré, cuyas sumas se pretenden reconocer retroactivamente.

Teniendo en cuenta el régimen aplicable para el actor y de los anteriores criterios de la H. Corte Constitucional que se aplican a cabalidad en el presente proceso, es procedente acceder a la reliquidación pensional.

Del acervo probatorio aportado se logrará demostrar que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación conforme al régimen de transición establecido en la Ley 100° de 1993, aplicando lo contemplado en la Ley

²¹Corte Constitucional, sentencia T-103 del 5 de marzo de 2013, M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.

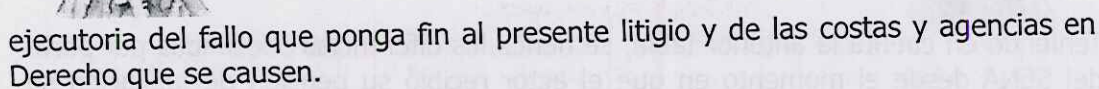


La actualización del salario base de liquidación para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación.

Sin embargo, el SENA si bien acató lo contemplado en la anterior norma, no indexó el salario sabe de liquidación para la primera mesada pensional de mi mandante, desconociendo el poder adquisitivo de la pensiones y el derecho constitucional a la actualización del Salario Base de Liquidación para la primera mesada.

A continuación, me permito detallar la efectiva liquidación del valor de la pensión vitalicia de jubilación del demandante para la primera mesada pensional, en la cual se tienen en cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, indexados hasta cuando se causa la prestación económica, como se ilustra en la siguiente tabla así:

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho en que ha sido lesionado mi mandante, solicito condenar al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** por: reliquidar la Pensión de Jubilación de mi mandante, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, ordenar el pago del retroactivo pensional que resulte a favor, de los intereses de mora por el no pago oportuno de las mesadas y/o la indexación de todas y cada una de sus mesadas pensionales. Así mismo al pago de los intereses a partir del día siguiente a la fecha de



Es usted su señoría competente para conocer de este asunto en primera instancia por la cuantía, por la naturaleza del asunto y por factor territorial, por cuanto el señor **JESUS MARIA HINCAPIE** tuvo como último lugar de trabajo en la ciudad de Cali - Cauca.

Se estima la cuantía de la demanda por los valores relacionados que resultan del análisis comparativo de la mesada pensional recibida por el demandante en cada uno de los años, comparada con la que debió recibir, según cuadro detallado de liquidación que se relaciona a continuación:

La siguiente tabla ilustrativa se logra determinar la efectiva liquidación de la pensión de jubilación del señor JESUS MARIA HINCAPIE que el SENA debió realizar, por lo que existe diferencias adeudadas por parte de la entidad demandada.

Edad a 01/04/1994 5
Sexo
(M/F): M
Desafiliación: Folio
Calculado con el IPC base 1998

Días faltan desde 1/04/94 para requisitos: -
Fecha a la que se indexará el cálculo 30/11/1990

AJUCOM Cali
Calle 14 No56-152 oficina 205. Tel:3395637 – 312-3010270
Email: ajucomCALI@gmail.com



Teniendo en cuenta la anterior tabla, se tienen las diferencias adecuadas por parte del SENA desde el momento en que el actor recibió su pensión de jubilación se deben indexar, como se detallan a continuación:

FECHAS DETERMINANTES DEL CÁLCULO:

IPC base 2008

demandante:

JESUS MARIA HINCAPIE HURTADO

EVOLUCIÓN DE MESADAS PENSIONALES.

OTORGADA SENA			CALCULADA			DIFERENCIA Adeudada
AÑO	IPC Variación	MESADA	AÑO	IPC Variación	MESADA	
1.990	0,3236	\$ 171.114	1.990	0,3236	184.546,68	13.432,68
1.991	0,2682	\$ 226.486	1.991	0,2682	244.265,98	17.779,49
1.992	0,2513	\$ 287.230	1.992	0,2513	309.778,12	22.547,95
1.993	0,2260	\$ 359.411	1.993	0,2260	387.625,36	28.214,25
1.994	0,2259	\$ 440.638	1.994	0,2259	475.228,69	34.590,67
1.995	0,1946	\$ 540.178	1.995	0,1946	582.582,85	42.404,71
1.996	0,2163	\$ 645.297	1.996	0,2163	695.953,48	50.656,66
1.997	0,1768	\$ 784.875	1.997	0,1768	846.488,22	61.613,70
1.998	0,1670	\$ 923.640	1.998	0,1670	996.147,33	72.507,00
1.999	0,0923	\$ 1.077.888	1.999	0,0923	1.162.503,94	84.615,67
2.000	0,0875	\$ 1.177.377	2.000	0,0875	1.269.803,05	92.425,70
2.001	0,0765	\$ 1.280.398	2.001	0,0765	1.380.910,82	100.512,95
2.002	0,0699	\$ 1.378.348	2.002	0,0699	1.486.550,49	108.202,19
2.003	0,0649	\$ 1.474.695	2.003	0,0649	1.590.460,37	115.765,52
2.004	0,0550	\$ 1.570.403	2.004	0,0550	1.693.681,25	123.278,70
2.005	0,0485	\$ 1.656.775	2.005	0,0485	1.786.833,72	130.059,03
2.006	0,0448	\$ 1.737.128	2.006	0,0448	1.873.495,16	136.366,90
2.007	0,0569	\$ 1.814.952	2.007	0,0569	1.957.427,74	142.476,13
2.008	0,0767	\$ 1.918.222	2.008	0,0767	2.068.805,38	150.583,02
2.009	0,0200	\$ 2.065.350	2.009	0,0200	2.227.482,75	162.132,74
2.010	0,0317	\$ 2.106.657	2.010	0,0317	2.272.032,41	165.375,40
2.011	0,0373	\$ 2.173.438	2.011	0,0373	2.344.055,83	170.617,80
2.012	0,0244	\$ 2.254.507	2.012	0,0244	2.431.489,12	176.981,84
2.013	0,0194	\$ 2.309.517	2.013	0,0194	2.490.817,45	181.300,20
2.014	0,0366	\$ 2.354.322	2.014	0,0366	2.539.139,31	184.817,42
2.015	-	\$ 2.440.490	2.015	-	2.632.071,81	191.581,74

FECHAS DETERMINANTES DEL CÁLCULO

Deben diferencias de mesadas desde:	30/11/1990
Deben diferencias de mesadas hasta:	31/03/2015
Fecha a la que se indexará:	31/03/2015

DIFERENCIAS DE MESADAS ADEUDADAS

PERIODO		Diferencia adeudada	Número de mesadas	Deuda total diferencias	IPC Inicial	IPC final	Deuda Indexada
Inicio	Final						
30/11/1990	30/11/1990	13.432,68	0,47	6.313,36	10,6912	118,9100	70.218,60
01/12/1990	31/12/1990	13.432,68	1,00	13.432,68	10,9608	118,9100	145.725,99
01/01/1991	31/01/1991			17.779,49			

AJUCOM Cali

Calle 14 No56-152 oficina 205. Tel:3395637 – 312-3010270

Email: ajucomCALI@gmail.com



		17.779,49	1,00		11,2901	118,9100	187.258,09
01/02/1991	28/02/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	11,6754	118,9100	181.078,42
01/03/1991	31/03/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	11,9707	118,9100	176.610,84
01/04/1991	30/04/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	12,3059	118,9100	171.799,95
01/05/1991	31/05/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	12,5772	118,9100	168.094,28
01/06/1991	30/06/1991	17.779,49	2,00	35.558,99	12,7763	118,9100	330.951,12
01/07/1991	31/07/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	13,0085	118,9100	162.521,81
01/08/1991	31/08/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	13,1742	118,9100	160.476,70
01/09/1991	30/09/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	13,3657	118,9100	158.177,50
01/10/1991	31/10/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	13,5433	118,9100	156.103,88
01/11/1991	30/11/1991	17.779,49	2,00	35.558,99	13,7086	118,9100	308.442,39
01/12/1991	31/12/1991	17.779,49	1,00	17.779,49	13,9010	118,9100	152.087,36
01/01/1992	31/01/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	14,3874	118,9100	186.356,35
01/02/1992	29/02/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	14,8687	118,9100	180.323,93
01/03/1992	31/03/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	15,2130	118,9100	176.242,14
01/04/1992	30/04/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	15,6472	118,9100	171.351,43
01/05/1992	31/05/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	16,0118	118,9100	167.450,38
01/06/1992	30/06/1992	22.547,95	2,00	45.095,91	16,3712	118,9100	327.548,96
01/07/1992	31/07/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	16,6985	118,9100	160.563,86
01/08/1992	31/08/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	16,8243	118,9100	159.363,27
01/09/1992	30/09/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	16,9640	118,9100	158.051,32
01/10/1992	31/10/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	17,1082	118,9100	156.719,16
01/11/1992	30/11/1992	22.547,95	2,00	45.095,91	17,2328	118,9100	311.172,04
01/12/1992	31/12/1992	22.547,95	1,00	22.547,95	17,3948	118,9100	154.136,76
01/01/1993	31/01/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	17,9585	118,9100	186.817,54
01/02/1993	28/02/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	18,5435	118,9100	180.923,67
01/03/1993	31/03/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	18,8919	118,9100	177.587,19
01/04/1993	30/04/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	19,2589	118,9100	174.202,60
01/05/1993	31/05/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	19,5687	118,9100	171.445,48
01/06/1993	30/06/1993	28.214,25	2,00	56.428,51	19,8718	118,9100	337.660,65
01/07/1993	31/07/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	20,1165	118,9100	166.776,13
01/08/1993	31/08/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	20,3698	118,9100	164.702,39
01/09/1993	30/09/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	20,5994	118,9100	162.866,66
01/10/1993	31/10/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	20,8196	118,9100	161.144,04
01/11/1993	30/11/1993	28.214,25	2,00	56.428,51	21,0882	118,9100	318.182,78
01/12/1993	31/12/1993	28.214,25	1,00	28.214,25	21,3274	118,9100	157.307,37
01/01/1994	31/01/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	22,0000	118,9100	186.962,64
01/02/1994	28/02/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	22,8109	118,9100	180.316,10
01/03/1994	31/03/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	23,3162	118,9100	176.408,90
01/04/1994	30/04/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	23,8699	118,9100	172.316,75
01/05/1994	31/05/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	24,2395	118,9100	169.688,70
01/06/1994	30/06/1994	34.590,67	2,00	69.181,35	24,4594	118,9100	336.327,46
01/07/1994	31/07/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	24,6829	118,9100	166.640,48



01/08/1994	31/08/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	24,9244	118,9100	165.025,86
01/09/1994	30/09/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	25,1966	118,9100	163.243,38
01/10/1994	31/10/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	25,4781	118,9100	161.439,57
01/11/1994	30/11/1994	34.590,67	2,00	69.181,35	25,7623	118,9100	319.317,50
01/12/1994	31/12/1994	34.590,67	1,00	34.590,67	26,1465	118,9100	157.312,70
01/01/1995	31/01/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	26,6300	118,9100	189.348,25
01/02/1995	28/02/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	27,5700	118,9100	182.892,41
01/03/1995	31/03/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	28,2900	118,9100	178.237,68
01/04/1995	30/04/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	28,9200	118,9100	174.354,90
01/05/1995	31/05/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	29,4000	118,9100	171.508,29
01/06/1995	30/06/1995	42.404,71	2,00	84.809,42	29,7600	118,9100	338.867,19
01/07/1995	31/07/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	29,9900	118,9100	168.134,17
01/08/1995	31/08/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	30,1800	118,9100	167.075,67
01/09/1995	30/09/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	30,4400	118,9100	165.648,61
01/10/1995	31/10/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	30,7100	118,9100	164.192,24
01/11/1995	30/11/1995	42.404,71	2,00	84.809,42	30,9500	118,9100	325.838,05
01/12/1995	31/12/1995	42.404,71	1,00	42.404,71	31,2400	118,9100	161.406,65
01/01/1996	31/01/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	32,0200	118,9100	188.119,42
01/02/1996	29/02/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	33,3100	118,9100	180.834,10
01/03/1996	31/03/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	34,0100	118,9100	177.112,14
01/04/1996	30/04/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	34,6800	118,9100	173.690,42
01/05/1996	31/05/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	35,2200	118,9100	171.027,37
01/06/1996	30/06/1996	50.656,66	2,00	101.313,33	35,6200	118,9100	338.213,58
01/07/1996	31/07/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	36,1600	118,9100	166.581,41
01/08/1996	31/08/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	36,5600	118,9100	164.758,86
01/09/1996	30/09/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	37,0000	118,9100	162.799,57
01/10/1996	31/10/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	37,4200	118,9100	160.972,31
01/11/1996	30/11/1996	50.656,66	2,00	101.313,33	37,7200	118,9100	319.384,09
01/12/1996	31/12/1996	50.656,66	1,00	50.656,66	38,0000	118,9100	158.515,37
01/01/1997	31/01/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	38,6300	118,9100	189.657,91
01/02/1997	28/02/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	39,8300	118,9100	183.943,89
01/03/1997	31/03/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	40,4500	118,9100	181.124,48
01/04/1997	30/04/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	41,1100	118,9100	178.216,62
01/05/1997	31/05/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	41,7700	118,9100	175.400,65
01/06/1997	30/06/1997	61.613,70	2,00	123.227,40	42,2800	118,9100	346.569,78
01/07/1997	31/07/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	42,6300	118,9100	171.862,19
01/08/1997	31/08/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	43,1200	118,9100	169.909,21
01/09/1997	30/09/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	43,6600	118,9100	167.807,72
01/10/1997	31/10/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	44,0800	118,9100	166.208,83
01/11/1997	30/11/1997	61.613,70	2,00	123.227,40	44,4400	118,9100	329.724,80
01/12/1997	31/12/1997	61.613,70	1,00	61.613,70	44,7200	118,9100	163.830,17
01/01/1998	31/01/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	45,5200	118,9100	189.407,02
01/02/1998	28/02/1998			72.507,00			



		72.507,00	1,00		47,0100	118,9100	183.403,70
01/03/1998	31/03/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	48,2400	118,9100	178.727,36
01/04/1998	30/04/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	49,6400	118,9100	173.686,70
01/05/1998	31/05/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	50,4100	118,9100	171.033,68
01/06/1998	30/06/1998	72.507,00	2,00	145.014,01	51,0300	118,9100	337.911,34
01/07/1998	31/07/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	51,2700	118,9100	168.164,77
01/08/1998	31/08/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	51,2900	118,9100	168.099,20
01/09/1998	30/09/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	51,4400	118,9100	167.609,01
01/10/1998	31/10/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	51,6200	118,9100	167.024,56
01/11/1998	30/11/1998	72.507,00	2,00	145.014,01	51,7100	118,9100	333.467,71
01/12/1998	31/12/1998	72.507,00	1,00	72.507,00	52,1800	118,9100	165.232,04
01/01/1999	31/01/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	53,3400	118,9100	188.632,35
01/02/1999	28/02/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	54,2400	118,9100	185.502,39
01/03/1999	31/03/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	54,7500	118,9100	183.774,42
01/04/1999	30/04/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	55,1800	118,9100	182.342,33
01/05/1999	31/05/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	55,4500	118,9100	181.454,46
01/06/1999	30/06/1999	84.615,67	2,00	169.231,34	55,6000	118,9100	361.929,84
01/07/1999	31/07/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	55,7700	118,9100	180.413,30
01/08/1999	31/08/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	56,0500	118,9100	179.512,04
01/09/1999	30/09/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	56,2400	118,9100	178.905,58
01/10/1999	31/10/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	56,4300	118,9100	178.303,20
01/11/1999	30/11/1999	84.615,67	2,00	169.231,34	56,7000	118,9100	354.908,28
01/12/1999	31/12/1999	84.615,67	1,00	84.615,67	57,0000	118,9100	176.520,17
01/01/2000	31/01/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	57,7400	118,9100	190.341,88
01/02/2000	29/02/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	59,0700	118,9100	186.056,20
01/03/2000	31/03/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	60,0800	118,9100	182.928,43
01/04/2000	30/04/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	60,6800	118,9100	181.119,64
01/05/2000	31/05/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	60,9900	118,9100	180.199,05
01/06/2000	30/06/2000	92.425,70	2,00	184.851,40	60,9800	118,9100	360.457,19
01/07/2000	31/07/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	60,9600	118,9100	180.287,73
01/08/2000	31/08/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	61,1500	118,9100	179.727,55
01/09/2000	30/09/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	61,4100	118,9100	178.966,62
01/10/2000	31/10/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	61,5000	118,9100	178.704,71
01/11/2000	30/11/2000	92.425,70	2,00	184.851,40	61,7100	118,9100	356.193,16
01/12/2000	31/12/2000	92.425,70	1,00	92.425,70	61,9900	118,9100	177.292,14
01/01/2001	31/01/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	62,6400	118,9100	190.804,51
01/02/2001	28/02/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	63,8300	118,9100	187.247,29
01/03/2001	31/03/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	64,7700	118,9100	184.529,79
01/04/2001	30/04/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	65,5100	118,9100	182.445,35
01/05/2001	31/05/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	65,7900	118,9100	181.668,86
01/06/2001	30/06/2001	100.512,95	2,00	201.025,90	65,8200	118,9100	363.172,12
01/07/2001	31/07/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	65,8900	118,9100	181.393,15
01/08/2001	31/08/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	66,0600	118,9100	180.926,35



01/09/2001	30/09/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	66,3000	118,9100	180.271,41
01/10/2001	31/10/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	66,4300	118,9100	179.918,63
01/11/2001	30/11/2001	100.512,95	2,00	201.025,90	66,5000	118,9100	359.458,48
01/12/2001	31/12/2001	100.512,95	1,00	100.512,95	66,7300	118,9100	179.109,76
01/01/2002	31/01/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	67,2600	118,9100	191.292,33
01/02/2002	28/02/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	68,1100	118,9100	188.905,04
01/03/2002	31/03/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	68,5900	118,9100	187.583,06
01/04/2002	30/04/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	69,2200	118,9100	185.875,79
01/05/2002	31/05/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	69,6300	118,9100	184.781,30
01/06/2002	30/06/2002	108.202,19	2,00	216.404,38	69,9300	118,9100	367.977,18
01/07/2002	31/07/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	69,9400	118,9100	183.962,28
01/08/2002	31/08/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	70,0100	118,9100	183.778,35
01/09/2002	30/09/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	70,2600	118,9100	183.124,43
01/10/2002	31/10/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	70,6600	118,9100	182.087,78
01/11/2002	30/11/2002	108.202,19	2,00	216.404,38	71,2000	118,9100	361.413,54
01/12/2002	31/12/2002	108.202,19	1,00	108.202,19	71,4000	118,9100	180.200,59
01/01/2003	31/01/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	72,2300	118,9100	190.581,17
01/02/2003	28/02/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	73,0400	118,9100	188.467,66
01/03/2003	31/03/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	73,8000	118,9100	186.526,80
01/04/2003	30/04/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	74,6500	118,9100	184.402,92
01/05/2003	31/05/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	75,0100	118,9100	183.517,91
01/06/2003	30/06/2003	115.765,52	2,00	231.531,04	74,9700	118,9100	367.231,64
01/07/2003	31/07/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	74,8600	118,9100	183.885,63
01/08/2003	31/08/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	75,1000	118,9100	183.297,98
01/09/2003	30/09/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	75,2600	118,9100	182.908,29
01/10/2003	31/10/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	75,3100	118,9100	182.786,86
01/11/2003	30/11/2003	115.765,52	2,00	231.531,04	75,5700	118,9100	364.315,95
01/12/2003	31/12/2003	115.765,52	1,00	115.765,52	76,0300	118,9100	181.055,87
01/01/2004	31/01/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	76,7000	118,9100	191.122,17
01/02/2004	29/02/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	77,6200	118,9100	188.856,87
01/03/2004	31/03/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	78,3900	118,9100	187.001,79
01/04/2004	30/04/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	78,7400	118,9100	186.170,57
01/05/2004	31/05/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	79,0400	118,9100	185.463,95
01/06/2004	30/06/2004	123.278,70	2,00	246.557,41	79,5200	118,9100	368.688,90
01/07/2004	31/07/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	79,5000	118,9100	184.390,83
01/08/2004	31/08/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	79,5200	118,9100	184.344,45
01/09/2004	30/09/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	79,7600	118,9100	183.789,75
01/10/2004	31/10/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	79,7500	118,9100	183.812,80
01/11/2004	30/11/2004	123.278,70	2,00	246.557,41	79,9700	118,9100	366.614,25
01/12/2004	31/12/2004	123.278,70	1,00	123.278,70	80,2100	118,9100	182.758,64
01/01/2005	31/01/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	80,8700	118,9100	191.236,79
01/02/2005	28/02/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	81,7000	118,9100	189.294,00
01/03/2005	31/03/2005	130.059,03		130.059,03			



			1,00		82,3300	118,9100	187.845,49
01/04/2005	30/04/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	82,6900	118,9100	187.027,69
01/05/2005	31/05/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	83,0300	118,9100	186.261,83
01/06/2005	30/06/2005	130.059,03	2,00	260.118,06	83,3600	118,9100	371.048,93
01/07/2005	31/07/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	83,4000	118,9100	185.435,49
01/08/2005	31/08/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	83,4000	118,9100	185.435,49
01/09/2005	30/09/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	83,7600	118,9100	184.638,49
01/10/2005	31/10/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	83,9500	118,9100	184.220,60
01/11/2005	30/11/2005	130.059,03	2,00	260.118,06	84,0500	118,9100	368.002,84
01/12/2005	31/12/2005	130.059,03	1,00	130.059,03	84,1000	118,9100	183.892,03
01/01/2006	31/01/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	84,5600	118,9100	191.761,91
01/02/2006	28/02/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	85,1100	118,9100	190.522,71
01/03/2006	31/03/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	85,7100	118,9100	189.188,98
01/04/2006	30/04/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	86,1000	118,9100	188.332,03
01/05/2006	31/05/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	86,3800	118,9100	187.721,55
01/06/2006	30/06/2006	136.366,90	2,00	272.733,79	86,6400	118,9100	374.316,42
01/07/2006	31/07/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	87,0000	118,9100	186.383,76
01/08/2006	31/08/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	87,3400	118,9100	185.658,20
01/09/2006	30/09/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	87,5900	118,9100	185.128,30
01/10/2006	31/10/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	87,4600	118,9100	185.403,47
01/11/2006	30/11/2006	136.366,90	2,00	272.733,79	87,6700	118,9100	369.918,73
01/12/2006	31/12/2006	136.366,90	1,00	136.366,90	87,8700	118,9100	184.538,38
01/01/2007	31/01/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	88,5400	118,9100	191.346,70
01/02/2007	28/02/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	89,5800	118,9100	189.125,22
01/03/2007	31/03/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	90,6700	118,9100	186.851,63
01/04/2007	30/04/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	91,4800	118,9100	185.197,17
01/05/2007	31/05/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	91,7600	118,9100	184.632,05
01/06/2007	30/06/2007	142.476,13	2,00	284.952,26	91,8700	118,9100	368.821,96
01/07/2007	31/07/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	92,0200	118,9100	184.110,38
01/08/2007	31/08/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	91,9000	118,9100	184.350,78
01/09/2007	30/09/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	91,9700	118,9100	184.210,47
01/10/2007	31/10/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	91,9800	118,9100	184.190,44
01/11/2007	30/11/2007	142.476,13	2,00	284.952,26	92,4200	118,9100	366.627,07
01/12/2007	31/12/2007	142.476,13	1,00	142.476,13	92,8700	118,9100	182.425,29
01/01/2008	31/01/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	93,8500	118,9100	190.791,98
01/02/2008	29/02/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	95,2700	118,9100	187.948,22
01/03/2008	31/03/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	96,0400	118,9100	186.441,35
01/04/2008	30/04/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	96,7200	118,9100	185.130,56
01/05/2008	31/05/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	97,6200	118,9100	183.423,76
01/06/2008	30/06/2008	150.583,02	2,00	301.166,05	98,4700	118,9100	363.680,86
01/07/2008	31/07/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	98,9400	118,9100	180.976,63
01/08/2008	31/08/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	99,1300	118,9100	180.629,75
01/09/2008	30/09/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	98,9400	118,9100	180.976,63



01/10/2008	31/10/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	99,2800	118,9100	180.356,84
01/11/2008	30/11/2008	150.583,02	2,00	301.166,05	99,5600	118,9100	359.699,22
01/12/2008	31/12/2008	150.583,02	1,00	150.583,02	100,0000	118,9100	179.058,27
01/01/2009	31/01/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	100,5900	118,9100	191.661,24
01/02/2009	28/02/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	101,4300	118,9100	190.073,99
01/03/2009	31/03/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	101,9400	118,9100	189.123,06
01/04/2009	30/04/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	102,2600	118,9100	188.531,24
01/05/2009	31/05/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	102,2800	118,9100	188.494,37
01/06/2009	30/06/2009	162.132,74	2,00	324.265,48	102,2200	118,9100	377.210,02
01/07/2009	31/07/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	102,1800	118,9100	188.678,84
01/08/2009	31/08/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	102,2300	118,9100	188.586,56
01/09/2009	30/09/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	102,1200	118,9100	188.789,70
01/10/2009	31/10/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	101,9800	118,9100	189.048,88
01/11/2009	30/11/2009	162.132,74	2,00	324.265,48	101,9200	118,9100	378.320,34
01/12/2009	31/12/2009	162.132,74	1,00	162.132,74	102,0000	118,9100	189.011,81
01/01/2010	31/01/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	102,7000	118,9100	191.477,98
01/02/2010	28/02/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	103,5500	118,9100	189.906,21
01/03/2010	31/03/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	103,8100	118,9100	189.430,58
01/04/2010	30/04/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	104,2900	118,9100	188.558,72
01/05/2010	31/05/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	104,4000	118,9100	188.360,04
01/06/2010	30/06/2010	165.375,40	2,00	330.750,79	104,5200	118,9100	376.287,57
01/07/2010	31/07/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	104,4700	118,9100	188.233,83
01/08/2010	31/08/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	104,5900	118,9100	188.017,86
01/09/2010	30/09/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	104,4500	118,9100	188.269,87
01/10/2010	31/10/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	104,3600	118,9100	188.432,24
01/11/2010	30/11/2010	165.375,40	2,00	330.750,79	104,5600	118,9100	376.143,62
01/12/2010	31/12/2010	165.375,40	1,00	165.375,40	105,2400	118,9100	186.856,60
01/01/2011	31/01/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	106,1900	118,9100	191.055,30
01/02/2011	28/02/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	106,8300	118,9100	189.910,72
01/03/2011	31/03/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	107,1200	118,9100	189.396,59
01/04/2011	30/04/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	107,2500	118,9100	189.167,01
01/05/2011	31/05/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	107,5500	118,9100	188.639,35
01/06/2011	30/06/2011	170.617,80	2,00	341.235,59	107,9000	118,9100	376.054,91
01/07/2011	31/07/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	108,0500	118,9100	187.766,42
01/08/2011	31/08/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	108,0100	118,9100	187.835,96
01/09/2011	30/09/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	108,3500	118,9100	187.246,54
01/10/2011	31/10/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	108,3500	118,9100	187.246,54
01/11/2011	30/11/2011	170.617,80	2,00	341.235,59	108,7000	118,9100	373.287,25
01/12/2011	31/12/2011	170.617,80	1,00	170.617,80	109,1600	118,9100	185.857,11
01/01/2012	31/01/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	109,9600	118,9100	191.386,96
01/02/2012	29/02/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	110,6300	118,9100	190.227,88
01/03/2012	31/03/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	110,7600	118,9100	190.004,61
01/04/2012	30/04/2012	176.981,84		176.981,84			



			1,00		110,9200	118,9100	189.730,53
01/05/2012	31/05/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	111,2500	118,9100	189.167,74
01/06/2012	30/06/2012	176.981,84	2,00	353.963,68	111,3500	118,9100	377.995,70
01/07/2012	31/07/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	111,3200	118,9100	189.048,78
01/08/2012	31/08/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	111,3700	118,9100	188.963,91
01/09/2012	30/09/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	111,6900	118,9100	188.422,51
01/10/2012	31/10/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	111,8700	118,9100	188.119,34
01/11/2012	30/11/2012	176.981,84	2,00	353.963,68	111,7200	118,9100	376.743,84
01/12/2012	31/12/2012	176.981,84	1,00	176.981,84	111,8200	118,9100	188.203,46
01/01/2013	31/01/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	112,1500	118,9100	192.228,32
01/02/2013	28/02/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	112,6500	118,9100	191.375,11
01/03/2013	31/03/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	112,8800	118,9100	190.985,17
01/04/2013	30/04/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	113,1600	118,9100	190.512,61
01/05/2013	31/05/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	113,4800	118,9100	189.975,38
01/06/2013	30/06/2013	181.300,20	2,00	362.600,40	113,7500	118,9100	379.048,91
01/07/2013	31/07/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	113,8000	118,9100	189.441,18
01/08/2013	31/08/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	113,8900	118,9100	189.291,48
01/09/2013	30/09/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	114,2300	118,9100	188.728,06
01/10/2013	31/10/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	113,9300	118,9100	189.225,02
01/11/2013	30/11/2013	181.300,20	2,00	362.600,40	113,6800	118,9100	379.282,31
01/12/2013	31/12/2013	181.300,20	1,00	181.300,20	113,9800	118,9100	189.142,01
01/01/2014	31/01/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	114,5400	118,9100	191.868,69
01/02/2014	28/02/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	115,2600	118,9100	190.670,13
01/03/2014	31/03/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	115,7100	118,9100	189.928,61
01/04/2014	30/04/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	116,2400	118,9100	189.062,63
01/05/2014	31/05/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	116,8100	118,9100	188.140,05
01/06/2014	30/06/2014	184.817,42	2,00	369.634,84	116,9100	118,9100	375.958,25
01/07/2014	31/07/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	117,0900	118,9100	187.690,15
01/08/2014	31/08/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	117,3300	118,9100	187.306,23
01/09/2014	30/09/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	117,4900	118,9100	187.051,15
01/10/2014	31/10/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	117,6800	118,9100	186.749,15
01/11/2014	30/11/2014	184.817,42	2,00	369.634,84	117,8400	118,9100	372.991,17
01/12/2014	31/12/2014	184.817,42	1,00	184.817,42	118,1500	118,9100	186.006,26
01/01/2015	31/01/2015	191.581,74	1,00	191.581,74	118,9100	118,9100	191.581,74
01/02/2015	28/02/2015	191.581,74	1,00	191.581,74	118,9100	118,9100	191.581,74
01/03/2015	31/03/2015	191.581,74	1,00	191.581,74	118,9100	118,9100	191.581,74
01/04/2015	30/04/2015	191.581,74	1,00	191.581,74	118,9100	118,9100	191.581,74
Totales				8.881.572,00			8.892.857,37

Valor total de las mesadas indexadas al

30/04/2015

\$ 8.892.857,37

VALORES ADUDADOS

TOTAL RETROACTIVO \$ 8.881.572
TOTAL INDEXACIÓN \$ 11.285

AJUCOM Cali
Calle 14 No56-152 oficina 205. Tel:3395637 – 312-3010270
Email: ajucomCALI@gmail.com



VALOR TOTAL ADEUDADO \$ 8.892.857

Su señoría es por el cuadro anterior que tazo la cuantía en la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 8.892.857,37) SIN INDEXAR, más las agencias en derecho y las costas, las mesadas que se causen durante el transcurso del proceso y las demás sumas que usted estime pertinentes.

PRUEBAS

1. Fotocopia de la resolución No1367 DE 1990, mediante la cual el SENA reconoció la pensión de jubilación al señor JESUS MARIA HINCAPIE.
2. Planillas de nómina y certificaciones laborales donde constan los factores salariales devengados por el actor durante el último año de servicio en el SENA.
3. Derecho de petición donde se solicitó al SENA la reliquidación de la pensión de jubilación.
4. Oficio mediante el cual el SENA negó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante.
5. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor JESUS MARIA HINCAPIE

ANEXOS

- Poder debidamente otorgado.
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la Entidad demandada y a la agencia judicial, respectivamente.
- Copia para el archivo del Juzgado.
- CD con copia de la demanda y sus anexos.

NOTIFICACIONES

Al suscrito, las recibirá en la calle 14 No.56-152 OFICINA 205 de la ciudad de cali. Tel. 8393433. Email: ajucomcali@gmail.com

Al demandante, Sr. **JESUS MARIA HINCAPIE**, con dirección de notificación Calle 14 Bo. 56-152 oficina 205, en la ciudad de Cali. Teléfono: 3974789

A la demandada, el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, en la Dirección General, ubicada en la Calle 52 No. 2Bis-15 Complejo Salomia

A la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** en la calle 70 # 4 - 60 de la Ciudad de Bogotá, D.C. Email: contactoinstitucional@rtvc.gov.co

Del señor(a) Juez,

Atentamente,

ANA MILENA RIVERA SANCHEZ
C.C. No. 65.776.225 de Ibagué
T.P. No. 130,188 del C. S. de la J.

AJUCOM Cali
Calle 14 No56-152 oficina 205. Tel:3395637 – 312-3010270
Email: ajucomCALI@gmail.com